



Govern de les Illes Balears

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL DE CONTROL DE DIA 5 D'ABRIL DE 2018.-

A les 21,32 hores del dia 5 d'abril de 2018, es reuneixen a la Casa Consistorial de l'Ajuntament, als efectes de celebrar sessió ordinària, en segona convocatòria, sota la Presidència del Sr. Batle, Martí Sansaloni Oliver, els Srs. regidors que es ressenyen a continuació i que són:

Sr. Miquel Santandreu Bestard.
Sr. Salvador Femenias Riera.
Sra. Caterina Mas Bennassar.
Sr. Llorenç Nicolau Bover. (substitueix a Sr. Pere Josep Bauzà Ferrer)
No assisteixen: Sr. Pere Josep Bauzà Ferrer.

A continuació, es passen a tractar els diferents assumptes que figuren a l'ordre del dia i dels quals s'acorden els dictàmens següents:

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.-

S'aprova per unanimitat dels membres presents de la Comissió, l'acta corresponent a la sessió celebrada en data 06.03.2018.

2.- APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE MESURES PER REGULAR LA PROMOCIÓ, VENDA I CONSUM DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES, I DEROGACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE MESURES PER FOMENTAR I GARANTIR LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA.-

El Sr. President comenta que el model d'ordenança que es proposa ve del Consell i que no s'ha tocat ni una coma. El Secretari per la seva banda anuncia informe desfavorable, fins i tot contra la pròpia iniciativa de presentar l'esborrany de norma indicat, després de la qual cosa demana permís per procedir a la lectura d'un text amb 5 folis d'objeccions al projecte de norma presentat pel Batle. Martí Sansaloni demana al funcionari que procedesqui a la lectura del seu informe i Francisco González llegeix en veu alta el següent informe jurídic:

INFORME JURÍDICO

Asunto: *Presentación de un modelo de Ordenanza referido al botellón.*

Antecedentes de hecho y administrativos:

En la Comisión Informativa general de control se ha presentado por el equipo de gobierno, un proyecto de ordenanza municipal sobre el botellón, proveniente según se dice de Instituciones como el Consejo Insular, la FELIB y la Asamblea de Alcaldes.

Informe:

1) La mera presentación de la propuesta normativa en cuestión, entiendo que vulnera el artículo 129 de la LPACAP, referido a los principios de buena regulación en el ejercicio de la potestad reglamentaria por los Poderes Públicos. En cuanto al principio de necesidad, por ejemplo, la norma propuesta no es necesaria, porque ya se tiene una en vigor regulando la misma materia, incluso de manera más amplia; pero en cualquier caso, en la exposición de motivos del texto planteado, no queda justificada la adecuación de esta iniciativa al principio de necesidad antes apuntado. Tampoco se ve, a mi juicio, justificada la medida por una razón de interés general, ni hay una identificación clara de los fines perseguidos, ni mucho menos se ve que sea el instrumento más adecuado para garantizar la consecución de los mismos.

2) En mi opinión, para abordar el asunto que se pretende regular, se debe tomar como base la siguiente realidad: el alcohol es una sustancia tóxica para el consumo humano en cualquier cantidad, pese a lo cual, la producción, distribución y consumo de bebidas alcohólicas son actividades legales en España e incluso están promocionadas con dinero público; contrariamente a lo que sucede con otras sustancias menos tóxicas que el alcohol. Por tanto, resulta esquizofrénico y contraproducente, permitir y prohibir a la vez el consumo de alcohol. La constatación anterior, contradice y ya tira por tierra, la afirmación que se hace dentro del primer párrafo de la exposición de motivos, de que las Instituciones trabajan para unificar esfuerzos en la promoción de la salud.



Govern de les Illes Balears

3) Por otro lado, el Ayuntamiento no ha cumplido tampoco el artículo 130 de la misma Ley antes citada, referido a evaluación normativa y a adaptación de sus normas a los principios de buena regulación; revisando la vigente Ordenanza sobre botellón, para comprobar en qué medida se han conseguido los objetivos previstos en la ella, antes de lanzarse a aprobar otra.

4) Entrando ya en el contenido del borrador que se me ha hecho llegar, empezaré diciendo que se trata de un texto largo, innecesariamente largo y reiterativo, con una pésima redacción de su exposición de motivos, como se puede ver dentro de sus párrafos 3º y 4º, que parecen más propios de un "nini" que de un documento procedente de una Administración Pública. Si en una norma no se dice algo comprensible y claro, lo mejor es eliminarla, por mor del principio de transparencia (artículo 129.5 de la Ley ya mencionada). Cuando en dicho párrafo 4º se habla sin más de impacto ambiental de una actividad, habría que ofrecer alguna comparación, porque todas las actividades, como por ejemplo respirar, tienen alguno por pequeño que sea. En este sentido, el impacto ambiental que pueda tener el "botellón" de los jóvenes, resulta irrisorio si se compara con el de actividades como la ganadería, tener hijos o la constante movilidad en coches, aviones y barcos contaminantes. Y ya es curiosamente paradójico que, frente a los aproximadamente 30.000 muertos en España por contaminación atmosférica, las Ordenanzas municipales brillen por su ausencia; y luego se intervenga con una, acusando a los jóvenes de producir impacto ambiental, por ejercer su libertad de tomar esto o lo otro, en un sitio o en otro, multiplicando la diarrea normativa contra sus derechos fundamentales, con el falso y cínico pretexto paternalista de protegerlos.

El 6º párrafo de la exposición de motivos tiene una redacción tan mala, que hace pensar en alguien que no sabe escribir o que lo hace bajo los efectos del alcohol. El 8º párrafo de dicha exposición no tiene una sola coma y es de una mediocridad jurídica considerable. El 9º párrafo es de peor calidad jurídica, pues dejando aparte la falta de autenticidad, veracidad y sinceridad de lo que ahí se dice, en tal párrafo se da por supuesta la existencia de derechos colectivos, y solo para los vecinos, pero no para el resto de las personas, cuando luego resulta que la Ordenanza se aplica a todos y cualquiera que estén dentro del municipio, como se puede ver en el articulado posterior (véanse los artículos 3.2 a) y 31, por ejemplo).

5) Centrado ahora en el articulado, cabe decir que los fundamentos legales apuntados en el artículo 2 no son suficientes, porque falta una nueva Ley, posterior a la Ley Local Balear y a la última reforma de la LBRL, que cumpla los requisitos y exigencias establecidos en el artículo 25.3 de la última Ley señalada; y también falta la memoria económica prevista en el punto 4 del citado artículo 25. Y lo mismo sucede con respecto a la competencia referida en el artículo 4 c).

En el punto 3 del artículo 4 se introducen conceptos extraños y ajenos a las competencias legales de un Ayuntamiento, sin mencionar base o cobertura normativa alguna. ¿Qué es eso del restablecimiento del Orden Cívico? ¿En qué Ley se contempla semejante concepto? ¿Dónde hay un Orden Cívico y cuándo ha sido previamente desmantelado o abolido? ¿Qué es eso de la reprensión de conductas antisociales? ¿En qué norma se reconoce competencia municipal para que un Ayuntamiento, a su arbitrio, riña a la gente por su conducta? Realmente se puede esperar el cumplimiento de una norma por sus destinatarios, con tales carencias de base y de sentido.

Si en el artículo 5.2 se dice que se ha de dispensar una protección especial a niños y jóvenes ¿Por qué se comete luego la inconsistencia de añadir a la población general? Si el descrédito moral de las Administraciones Públicas, derivado de su comportamiento, ya hace estériles ante los jóvenes, los mensajes moralizantes provenientes de las mismas ¿Qué decir cuando encima se hacen desde semejante precariedad intelectual e indigencia cultural?

El artículo 7.2 es un ejemplo perfecto de doble moral: después de una fastidiosa retahíla de palabrería biempensante y políticamente correcta, llena de declaraciones de buenas intenciones contra el consumo abusivo de alcohol, resulta que luego se dejan fuera la mayor parte de los espacios y ocasiones de dicho consumo como: terrazas, mostradores, fiestas y espacios cerrados.

En relación con el artículo 9.1 a), podríamos preguntar lo siguiente: si está demostrado científicamente que cualquier medida de consumo alcohólico en humanos, es dañina en alguna medida ¿En qué consiste una dispensación responsable de bebidas alcohólicas, autorizada por el Alcalde?

En cuanto al apartado b) del mismo artículo 9, entiendo que ahí se produce una discriminación por edad (prohibida en el artículo 14 de la Constitución), pues en el artículo 17.1 de dicha Norma Suprema, no se dice que el derecho fundamental a la libertad se reconozca a toda persona mayor de edad, sino a toda persona (con independencia de su edad). Donde la Ley no distingue, el interprete de la misma no tiene porqué distinguir. Y no cabe apelar a un principio rector de política económica y social, como pueda ser la protección de la salud, para vulnerar un derecho fundamental de los menores, porque los derechos fundamentales tienen mayor fuerza obligatoria y protección jurídica que los principios rectores de política económica y social. De hecho, si no se hacen normas prohibiendo que los menores se den con martillos en la cabeza, con el pretexto de la protección de su salud; por el mismo motivo, tampoco se habrá de violar su derecho fundamental a la libertad, con normas del mismo estilo, en el caso del consumo de alcohol.



Govern de les Illes Balears

De todas formas, tampoco está muy claro que la protección de la salud, sirva de justificación para prohibir el consumo de alcohol a un joven, de 17 años por ejemplo, dado que la afectación dañina del consumo de tal sustancia, se relaciona más con factores individuales o incluso con el sexo de la persona, que con la edad; por lo cual, podría tener más sentido, en su caso, la prohibición del consumo de alcohol en función de la vulnerabilidad personal o la prohibición del mismo para las mujeres, ya puestos a discriminar por circunstancias prohibidas en el artículo 14 de la Constitución, en contra del derecho fundamental a la igualdad.

Por lo que respecta al artículo 9.2, un Ayuntamiento no debería promover los envases de plástico que no sean reciclados y biodegradables, cuando por Pleno tiene aprobados una serie de compromisos ambientales, como por ejemplo la Agenda Local 21; para no contravenir el Principio General del Derecho denominado “de los actos propios”, que impone un mínimo de coherencia en la actuación de las Administraciones Públicas.

En el artículo 10.3, la última frase comienza con una chapuza semántica, en forma de galimatías humorístico a lo Groucho Marx; lo cual quita seriedad a lo que pretende ser una norma jurídica. Bien está que la gente diga cosas divertidas, pero no que las haga pasar por normas obligatorias, con restricción de derechos fundamentales para las personas y con posibles sanciones para las mismas.

En el artículo 17.2, también la mala redacción ha producido un resultado chistoso, pero en cualquier caso, actualmente, ningún ciudadano está obligado a llevar, ni a mostrar el DNI, y menos a alguien cualquiera de un establecimiento.

En el artículo 19.2 c), una vez más, la insolvencia para redactar correctamente un texto (pese a que se dedican millones de euros en esta CCAA a “normalización lingüística”), hace que un intento regulatorio no pueda tomarse en serio, por los destinatarios de lo que pretende ser una norma jurídica. Antes de intentar regular algo, habría que saber escribir, porque si no, se corre el riesgo, por ejemplo, de prohibir lo que supuestamente se quiere fomentar, como en este caso sucede con la convivencia. Dentro del mismo artículo, pero ya en su apartado 3, vemos que las excepciones a la prohibición del consumo de alcohol, pueden ser más que las situaciones que entran dentro de la regla prohibitiva. Sea como fuere, las justificaciones brillan por su ausencia, pues si el consumo de alcohol es malo, habría que explicar porqué pasa a bueno en terrazas, mostradores, interior de establecimientos, fiestas, conciertos, acontecimientos, etc.

El artículo 23.5 no se entiende bien, a lo cual contribuye bastante una redacción confusa por incorrecta.

Por lo que respecta al artículo 25.3, se prevén ahí determinadas sanciones (la leve de 1.000 euros, las graves de 10.000 euros y la muy grave de 100.000 euros), que deberían tener una cobertura legal específica, por exceder de los límites máximos permitidos en el artículo 141 de la LBRL, para esas clases de sanciones. Por tanto, debería indicarse expresamente el precepto legal en que se apoyan las cuantías de tales sanciones o reducirse dichas cuantías a los límites del artículo citado.

En cuanto al artículo 26.1 y 2, como la materia sancionadora está presidida por el principio de legalidad y no por el de oportunidad, entiendo rechazable que se abra una puerta a la discrecionalidad, dejando al mutuo acuerdo entre Alcalde e infractor, una medida sustitutoria de una sanción.

En el artículo 27.3, el plazo de prescripción previsto para las sanciones leves, vulnera el artículo 30.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, donde se fija el plazo de un año para dicha prescripción.

En el artículo 28.1 se vuelve a poner de manifiesto, cómo los defectos de redacción afectan al significado de las frases y en consecuencia al entendimiento de las cosas; porque las conductas no se envían, sino que, en su caso, podrán ser objeto de comunicación.

En el artículo 29 habría de dejarse claro que las instrucciones del Alcalde no pueden contradecir a la Ordenanza, ni menos aún a normas de superior rango. Por otro lado, lo que se califica, dentro del 2º párrafo de dicho artículo, como requerimiento, sería técnicamente una amonestación.

En el artículo 32.2 se contempla una infracción grave que no lleva aparejada la sanción correspondiente.

Conclusión y propuesta de resolución:

Por todo lo expuesto, se informa desfavorablemente el borrador presentado, y se propone la retirada del mismo, con renuncia a aprobar la correspondiente Ordenanza, por ser innecesaria cuando ya se tiene una en vigor, que es muy mala, inconstitucional y por tanto ilegal.

En Petra a 5 de abril de 2018.

EL SECRETARIO MUNICIPAL

Fdo: Francisco González Benito.

Un cop escoltat l'informe anterior, el Sr. Batle proposa a la resta dels membres de la Comissió, deixar aquest assumpte sobre la Mesa i que mentrestant sigui passat a net pel Secretari i tramès a les entitats d'on procedeix el model d'ordenança que s'ha presentat a aquesta Comissió. L'anterior proposta del Batle rep 3 vots favorables (2 del PP i 1 del PI) i 2 abstencions del grup Més, quedant per tant aquest assumpte, per a una posterior sessió.



Govern de les Illes Balears

3.- APROVACIÓ D'UN REGLAMENT MUNICIPAL D'ÚS PERA LES AULES DE NA CAPITANA.-

Per a aquest punt de l'ordre del dia, és el regidor popular Miquel Santandreu qui actua com a ponent, procedint a la lectura en veu alta del text en qüestió.

En el primer torn per a l'oposició, Caterina Mas qualifica l'Ordenança presentada en Comissió com poc detallada i incompleta, atès que falten moltes coses, en la seva opinió, com ara: la regulació del preu públic corresponent, les activitats a desenvolupar i les prioritats pel que fa al desenvolupament de les mateixes.

Després és el Secretari qui sol·licita l'ús de la paraula per a realitzar una sèrie d'observacions sobre el text que se li ha presentat, com les següents:

- 1) *En relación con el artículo 2.3.5 y 6: se debería concretar quién autoriza y quién modifica o anula la autorización, entendiendo el funcionario que esa atribución correspondería al Alcalde y que debería quedar constancia escrita. También por lo que respecta al artículo 2.6, el funcionario citado propone que se sustituya la expresión “van en detrimento”, por la palabra «contradiven», menos confusa.*
- 2) *En relación con el artículo 3, el Secretario propone que se sustituya la palabra “obtengui”, por la palabra «pretengui», por ser más adecuada para lo que se pretende decir.*
- 3) *En relación con el artículo 5.3 el funcionario indicado rechaza la inclusión ahí de la categoría de sustancias psicotrópicas, por ser muy amplia, muy vaga y muy problemática, dado comprende medicamentos y hasta alimentos como el café, el té o el chocolate. Con respecto al punto 5 del mismo artículo, considera el Secretario que no está justificada la inclusión ahí de utensilios de vidrio, por motivos ambientales y sanitarios, ya que se trata del material mejor para alimentación. Sobre el punto 6 del mismo artículo, el Secretario propone que se añada la expresión no humans después de la palabra “animals”. En cuanto al punto 7 del mismo artículo, el funcionario mencionado propone que se añada la palabra «inadecuada» después de la palabra “manipulació”.*
- 4) *En relación con el artículo 6, el Secretario rechaza que se ponga en la primera frase, la palabra “podrà”, debido a que la materia sancionadora no está regida por el principio de discrecionalidad, ni por el de oportunidad, sino por el de legalidad; con lo cual entiende dicho funcionario que una vez tipificadas las prohibiciones, deben predeterminarse las sanciones y con certeza, pues en caso contrario se vulnera el artículo 9.3 de la Constitución, en cuanto norma que garantiza la seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad, por parte de los Poderes Públicos.*

Després de la intervenció del Secretari i com a conseqüència de l'acceptació pels membres de l'equip de Govern d'algunes propostes de rectificació formulades per aquest, es sotmet a dictamen com a projecte de Reglament el text que literalment es transcriu més avall:

«NORMES D'ÚS I FUNCIONAMENT DE LES SALES POLIVALENTS DEL POLIESPORTIU “NA CAPITANA”

Exposició de Motius

Les sales polivalents del poliesportiu de “Na Capitana”, són un espai d'ús sociocultural, promogut per l'Ajuntament de Petra, que té com a objectiu incrementar la xarxa d'equipaments i espais públics, que donen suport a les activitats lúdiques i culturals del nostre municipi.

Les sales estan a disposició de les diferents entitats socioculturals que es desenvolupen la seva activitat al nostre poble, així com totes aquelles persones de Petra que demandin la seva utilització i es comprometin a fer-ne un ús responsable i adequat de les instal·lacions.

Per aquest motiu, l'ajuntament ha dictat unes normes que serviran, d'una part, per a garantir els drets de les persones usuàries de les instal·lacions i d'una altra, per a fixar les necessàries obligacions o deures d'aquestes amb el personal, amb les altres persones usuàries o amb el propi espai.

Article 1. – Objectiu

La finalitat d'aquest reglament és establir i definir la tipologia i les normes d'organització i funcionament de l'espai polivalent destinat a satisfer les necessitats de la ciutadania, associacions, i programes municipals.



Govern de les Illes Balears

Article 2. – Sol·licitud d'ús

1. Podran sol·licitar l'ús d'aquest espai totes aquelles entitats, associacions o ciutadans i ciutadanes de Petra amb caràcter NO LUCRATIU.
2. Si la sol·licitud per part de la persona sol·licitant és amb ànim de lucre, l'associació, ciutadà o ciutadana o entitat haurà de pagar un lloguer per aquest espai.
3. Per sol·licitar les sales, els ciutadans, associacions o entitats hauran d'emplenar, prèviament a l'ús de l'espai, una instància dirigida al batle/essa. El model d'aquesta és l'habitual en registre, on especificaran les seves dades, les activitats que desitgen realitzar en aquest espai i l'horari en què pretenen desenvolupar-les. Aquesta instància es presentarà en el Registre Municipal. La persona sol·licitant rebrà l'autorització d'ús, i a partir d'aquest moment podrà utilitzar la sala polivalent en cas que la sol·licitud sigui atesa de forma positiva.
4. Igualment, si s'ha sol·licitat l'espai per diversos dies, en cas que no s'utilitzi, la persona sol·licitant haurà de comunicar-ho per registre, amb l'objectiu que quedi disponible per a un altre ús o sol·licitud.
5. En l'horari en què es sol·licita utilitzar l'espai polivalent, s'especificarà l'hora d'inici i hora de finalització de l'activitat, d'aquesta manera, l'ajuntament tindrà constància de l'horari. Aquest no podrà en cap cas ser modificat, llevat que prèviament s'aprovi una modificació.
6. Per utilitzar les sales polivalents, les persones o entitats sol·licitants hauran de designar un/a representant, que serà responsable del bon ús de la instal·lació i del respecte de les normes establides. En tot cas, la persona sol·licitant es compromet a acatar les normes previstes en aquest reglament. Es podrà anul·lar l'autorització quan sigui necessari, en funció del mal ús de la instal·lació o perquè les activitats a realitzar contradiven les causes originals de la petició o per incompliment d'aquestes normes.
7. Qualsevol incident haurà de ser comunicat de forma immediata al personal de l'ajuntament o personal habilitat en les instal·lacions.

Article 3. - Taxa per utilització de les sales polivalents.

Quan la sol·licitud sigui realitzada per a una activitat lucrativa, o per a una entitat que pretengui un benefici particular, l'Ajuntament establirà un preu públic per a aquest espai i una fiança de 300€, la qual serà retornada en el termini d'una setmana aproximadament, a partir de la finalització de l'activitat, amb un informe previ favorable del departament corresponent.

Article 4. – Ús de les sales

Les persones usuàries autoritzades podran fer ús de la instal·lació dins de l'horari sol·licitat, procurant el bon funcionament de la instal·lació i el respecte de les condicions particulars d'ús i normes generals establides. Les activitats a desenvolupar, hauran de tindre en compte les característiques de l'espai.

L'ajuntament no es farà responsable davant de la persona usuària en cas d'accidents o desperfectes derivats de l'incompliment per part de la persona sol·licitant, d'aquestes normes, d'un comportament negligent o d'un mal ús de la sala.

Les sales s'hauran de deixar en el mateix estat de neteja i conservació en que s'han trobat, i s'han de recollir les escombraries o el fems que s'hagin generat conseqüència de l'ús de les sales.

Article 5.- No està permès a les sales polivalents

1. Entrar a fer-ne ús sense la deguda autorització.
2. Fumar.
3. Entrar sota els efectes de substàncies psicotròpiques o de l'alcohol.
4. L'entrada de qualsevol material que pugui ser utilitzat com a arma, la utilització de símbols que inciten a la violència o comportaments delictius en les activitats que es realitzen en aquest espai.
5. Introduir utensilis de vidre.
6. L'entrada a animals en la sala, a excepció dels gossos guia.
7. La manipulació inadequada de qualsevol element de la sala, com a portes, parets, instal·lació elèctrica, etc.
8. L'entrada de vehicles de tracció mecànica o que siguin arrossegats amb vehicles de motor.

Article 6.- Infraccions i sancions



Govern de les Illes Balears

L'incompliment de les obligacions que es deriven de la condició de persona usuària, podrà portar com a conseqüència la pèrdua d'aquesta condició, d'acord amb el que preveu aquest reglament, inclosa la possibilitat que no es torni a autoritzar aquesta persona perquè utilitzi la instal·lació. En cas que la persona usuària actuï de forma notòriament contrària a aquest reglament, el personal municipal està autoritzat per exigir-li que l'abandoni, o requerirà la presència de les forces de seguretat, si la gravetat del cas així ho exigeix, sense perjudici de les accions posteriors aplicables al cas. L'ajuntament, en cas necessari, pot modificar aquestes normes per ajustar-les a la pràctica de l'ús, i podran introduir-se nous apartats i requeriments per a la renovació de l'assignació de l'espai. També es reserva el dret d'establir una altra normativa addicional si ho considera oportú i sempre per facilitar la consecució dels objectius fixats per l'Ajuntament.

Petra, 27 de febrer de 2018»

El dictamen de la Comissió sobre el Reglament anteriorment transcrit, resulta favorable amb 3 vots a favor (2 del PP i 1 del PI) i 2 abstencions del grup MÉS.

4.- ALTRES.-

a) En aquest punt el Sr. President comenta els antecedents de l'assumpte referit a la devolució de la multa que va imposar l'Ajuntament a Prefabricats Riutort S, L i afirma que l'import dels doblers que ha hagut de desemborsar l'Ajuntament, puguen a 48.000 euros, més les despeses d'advocat que sumen 4.000, més despeses de procurador. Aquest assumpte no rep dictamen al no haver proposta d'acord per al Plenari i només es donarà compte, segons ha fet constar el Batle en les convocatòries de Comissió i Plenari.

b) Moció de MÉS PER PETRA amb número de registre municipal d'entrada 442 i data 02.03.2018, sobre Llibertat d'Expressió i Absolució del raper Valtònc.

En aquesta ocasió serà el regidor de Més per Petra, Llorenç Bover, qui llegeix en veu alta aquesta moció i en ella es diu literalment el que segueix:

«El grup municipal de MÉS PER PETRA a l'Ajuntament de PETRA presenta a la consideració del Ple la següent MOCIÓ relativa a

MOCIÓ EN DEFENSA DE LA LLIBERTAT D'EXPRESSION I ABSOLUCIÓ DEL RAPER VALTÒNC **EXPOSICIÓ DE MOTIUS**

Davant la condemna a 3 anys i mig de presó a Josep Miquel Arenas Beltran, Valtònc, per delictes d'enaltiment del terrorisme, calúmnies i injúries greus a la Corona i amenaces, proposam al Ple l'adopció dels següents ACORDS:

1.- L'Ajuntament de Petra manifesta la seva preocupació per l'extensió del delicte d'enaltiment del terrorisme a actes i missatges que haurien d'estar emparats per a l'exercici de la llibertat d'expressió i la llibertat de creativitat, per les recents condemnes per aquest càrrec que fan retrocedir els ciutadans i ciutadanes a Espanya en els seus drets fonamentals.

2.- L'Ajuntament de Petra demana l'absolució de Josep Miquel Arenas Beltran, Valtònc, pels delictes d'enaltiment del terrorisme, calúmnies i injúries greus a la Corona i amenaces que actualment se li imputen.»

El Secretari sol·licita l'ús de la paraula per emetre informe jurídic verbal, en aquests termes:

En la moción presentada no se dice a quién habría de pedir la absolución el Ayuntamiento de un ya condenado y no meramente imputado. En cualquier caso, como juzgar corresponde exclusivamente a Juzgados y Tribunales (artículo 117.4 de la Constitución), la petición habría de cursarse al TC o al TEDH y por los cauces procesales legalmente establecidos, esto es: recurso de amparo individual por parte de Valtònc, como persona física directamente afectada, o por el Defensor del Pueblo; y/o demanda ante el TEDH, que puede ser individual, de ONG o de grupo de particulares.

El dictamen de la Comissió sobre la moció abans transcrita resulta favorable amb 2 vots a favor del grup Més i 3 abstencions (2 del PP i 1 del PI).

c) Moció de MÉS PER PETRA amb número de registre municipal d'entrada 420 i data 28.02.2018, sobre Finançament de les Illes Balears.

En aquesta ocasió també serà el regidor de Més per Petra, Llorenç Bover, qui llegeixi en veu alta aquesta



Govern de les Illes Balears

moció i en ella es diu literalment el que segueix:

«El grup municipal de MÉS PER PETRA a l'Ajuntament de PETRA presenta a la consideració del Ple la següent MOCIÓ relativa a

L'ahesió de l'Ajuntament de Petra a la Campanya per un Bon Finançament per a les Illes Balears EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat 14 de febrer es va presentar davant els mitjans de comunicació la campanya per un bon finançament per a les Illes Balears, un moviment que uneix un ample ventall d'entitats cíviques, socials, culturals i polítiques, amb l'objectiu d'acabar amb l'injust finançament que han patit històricament les nostres illes per part del Govern central.

Es tracta d'un moviment transversal que a dia d'avui reuneix entitats com la Federació d'Associacions de Veïns de Palma, UGT, CCOO, STEI, OCB, USO, PIMEM, Unió de Pagesos, FAPA Mallorca o les Fundacions Darder-Mascaró i Gabriel Alomar, entre d'altres. L'objectiu no és altre que revertir els desavantatges que pateixen els ciutadans d'aquesta terra respecte dels de la resta de l'Estat. L'actual model de finançament situa les Illes Balears en un dèficit fiscal d'entre el 5 i 14 % del PIB (depenent del sistema de càlcul), un tracte injust que es tradueix, per exemple i en el millor dels casos, en una despesa pública en Sanitat de 1.275 € per habitant davant els 1.357 € de la mitjana espanyola. I si parlem d'Educació, la mitjana espanyola és de 915 € i la de les Balears, de 831 €.

Com bé varen exposar els impulsors de la campanya a l'acte de presentació celebrat a Inca, aquesta discriminació afecta greument els nostres serveis públics i, en conseqüència, les condicions de vida de la gent.

Però si hi ha unes institucions que pateixen de forma més directa l'infrafinançament són els ajuntaments, abocats a oferir uns serveis de proximitat als ciutadans amb una dramàtica limitació dels recursos disponibles. A la situació general de discriminació que viuen les Illes Balears en el cas dels ajuntaments s'hi ha d'afegir la llei que regula la seva despesa, una llei que els obliga a dedicar bona part del romanent de tresoreria a amortitzar deute bancari en detriment dels serveis essencials.

Fins i tot als ajuntaments sanejats- la majoria a les Illes Balears- se'ls impedeix posar a disposició de la ciutadania tots els doblers que ingressen, i des del 2012 obliga a dipositar als bancs part o tot el superàvit municipal. Aquesta mesura, a més de suposar un atac a l'autonomia local, causa situacions esperpèntiques. Així, just a Mallorca els consistoris tenen 357 milions d'euro als bancs, però no els poden gastar en les necessitats dels veïnats i les veïnades. El 2017 ens trobam amb casos com el d'Alcúdia, amb 56 milions, però també Calvià i Manacor (30 milions), Pollença, Andratx i Lluçmajor (20 milions), Marratxí (19 milions), Palma (16 milions), Santa Margalida (12 milions) ...

Els responsables de la campanya per un bon finançament ja ha manifestat que la derogació o modificació d'aquesta regla de despesa serà un dels seus principals objectius i que per aquest motiu convida els consistoris de les Illes Balears a adherir-s'hi.

Després de molts d'anys de reivindicacions, la Campanya per un Bon Finançament és l'eina que com a societat necessitam per reivindicar un finançament just per a les nostres illes i uns serveis públics de qualitat. Però aquesta eina només serà efectiva si entitats, associacions i institucions s'uneixen per aconseguir-ho, mitjançant un moviment transversal i reivindicatiu.

Proposta d'acord

1.- Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Petra a la Campanya per un Bon Finançament per a les Illes Balears.

2.- Fer arribar aquest acord als responsables de la campanya a fi de que inscrivin l'Ajuntament de Petra com a membre adherit.»

El Secretari sol·licita l'ús de la paraula per emetre informe jurídic verbal, en aquests termes:

A mi juicio se están confundiendo dos conceptos diferentes, pues déficit fiscal no es lo mismo que discriminación o trato injusto. Es perfectamente posible que una región más rica tenga un déficit fiscal, como consecuencia de que haya de aportar más a otras más pobres, por el principio constitucional de solidaridad interterritorial, y hay diversos estudios sobre balanzas fiscales que apuntan en ese sentido, si hablamos de Baleares; pero tal cosa no es sinónimo de discriminación, ni de trato injusto, sino más bien de lo contrario.

Por otro lado, tampoco es lo mismo que una Ley obligue a pagar lo que se debe, a que una Ley obligue a depositar el dinero municipal en los Bancos.

El dictamen de la Comissió sobre la moció abans transcrita resulta igualment favorable amb 2 vots a favor



Govern de les Illes Balears

del grup Més i 3 abstencions (2 del PP i 1 del PI).

d) Moció de MÉS PER PETRA amb número de registre municipal d'entrada 441 i data 02.03.2018, sobre Descompte de resident al 75 % per als vols amb la península.

En aquesta ocasió també serà el regidor de Més per Petra, Llorenç Bover, qui llegeix en veu alta aquesta moció i en ella es diu literalment el que segueix:

«El grup municipal de MÉS PER PETRA a l'Ajuntament de PETRA presenta a la consideració del Ple la següent MOCIÓ relativa a

MOCIÓ EN RELACIÓ AL DESCOMPTE DE RESIDENT AL 75% PER ALS VOLS AMB LA PENÍNSULA EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'article 138 de la Constitució Espanyola indica que «l'Estat garanteix la realització efectiva del principi de solidaritat consagrat en l'article 2 de la Constitució, vetllant per l'establiment d'un equilibri econòmic adequat i just entre les diverses parts del territori espanyol i atenent en particular a les circumstàncies del fet insular».

La condició territorial dels arxipèlags i ciutats extra peninsulars fa que els residents només tinguin l'avió com a mitjà de transport efectiu i d'ús real per a comunicar-nos amb la península. En aquests moments, les rutes ofereixen freqüències i places escasses a preus desorbitats. A més a més, en dates determinades com ponts, alguns caps de setmana, Nadal o vacances no només és molt difícil trobar una plaça, sinó que en cas d'aconseguir-la, els preus són prohibitius per a una família de classe mitja i impossibles per a la immensa majoria de la ciutadania. Aquestes són les circumstàncies objectives amb les quals han de conviure un important nombre de persones ciutadanes que tenen la necessitat de viatjar a territori peninsular per raons obligades, ja siguin tasques mèdiques, d'estudis, administratives, familiars o econòmiques.

Existeix unanimitat política a l'hora garantir la connectivitat de les persones residents a les Comunitats Autònomes allunyades de la resta del territori espanyol, en termes de freqüències, qualitats i tarifes adequades, que salvin la barrera de la mar com a mínim en termes tarifaris.

És per tots aquests motius que es presenta a la consideració del ple d'aquesta Corporació la següent proposta d'ACORD:

1.- L'ajuntament de Petra insta al Govern de l'Estat Espanyol a implantar una subvenció del 100 % de les taxes aeroportuàries al passatger, als residents per a trajectes amb origen/destinació Balears, Canàries, Ceuta i Melilla.

2.- L'Ajuntament de Petra insta al Govern de l'Estat Espanyol a què els pròxims pressuposts de l'estat elevin al 75 % la bonificació del preu dels bitllets aeris en tots els trajectes en ambdós sentits entre les Illes Balears, Canàries, Ceuta i Melilla amb la resta del territori nacional.»

El Secretari sol·licita l'ús de la paraula per emetre informe jurídic verbal, en aquests termes:

Si la base jurídica de la moción presentada está en el principio constitucional de solidaridad, resulta incongruente con dicho principio, el que se pida el aumento del descuento para el transporte aéreo, el cual beneficia sobre todo a las clases más altas, que son las que más le usan; y que no se pida el aumento del descuento para el transporte en barco, más usado por clases más bajas.

El dictamen de la Comissió sobre la moció abans transcrita resulta igualment favorable amb 2 vots a favor del grup Més i 3 abstencions (2 del PP i 1 del PI).

En no plantejar-se ja més assumptes a tractar en aquest altre punt de l'ordre del dia, el Sr. President dóna per acabada la sessió essent les 22,08 hores, i jo el Secretari estenc la present acta i la certific.

El President de la Comissió.

El Secretari.

Signat: Martí Sansaloni Oliver.

Signat: Francisco González Benito.